



27.000 **combatientes** **y récord en** **disputas:**

el deterioro de la
seguridad marca el
inicio de 2026

FIP
FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ

Análisis de coyuntura

27.000 **combatientes** **y récord en** **disputas:**

**el deterioro de la
seguridad marca el
inicio de 2026**

Director Conflicto y Seguridad de la FIP

Javier Flórez

Autores

Andrés Cajiao

Gerson Arias

Paula Tobo

Edición y corrección de estilo

Elizabeth Reyes Le Paliscot

Fotos documento

Julián Ríos Monroy

ISBN

--

Foto de portada: Un combatiente de la disidencia de las FARC conocida como EMBF sostiene una ametralladora comando 762 en un paraje de las sábanas del Yarí.
Foto: Julián Ríos Monroy

Enero, 2026

-
-
-

Fundación Ideas para la Paz (FIP)

Calle 100 #8A-55. Torre C, Oficina 207. Bogotá

Tel. +57 316 472 9985

www.ideaspaz.org / e-mail: fip@ideaspaz.org

Contenido

5

Los grupos armados tienen 5.000 nuevos miembros

7

Escala la guerra entre grupos, también se expanden y consolidan su control

9

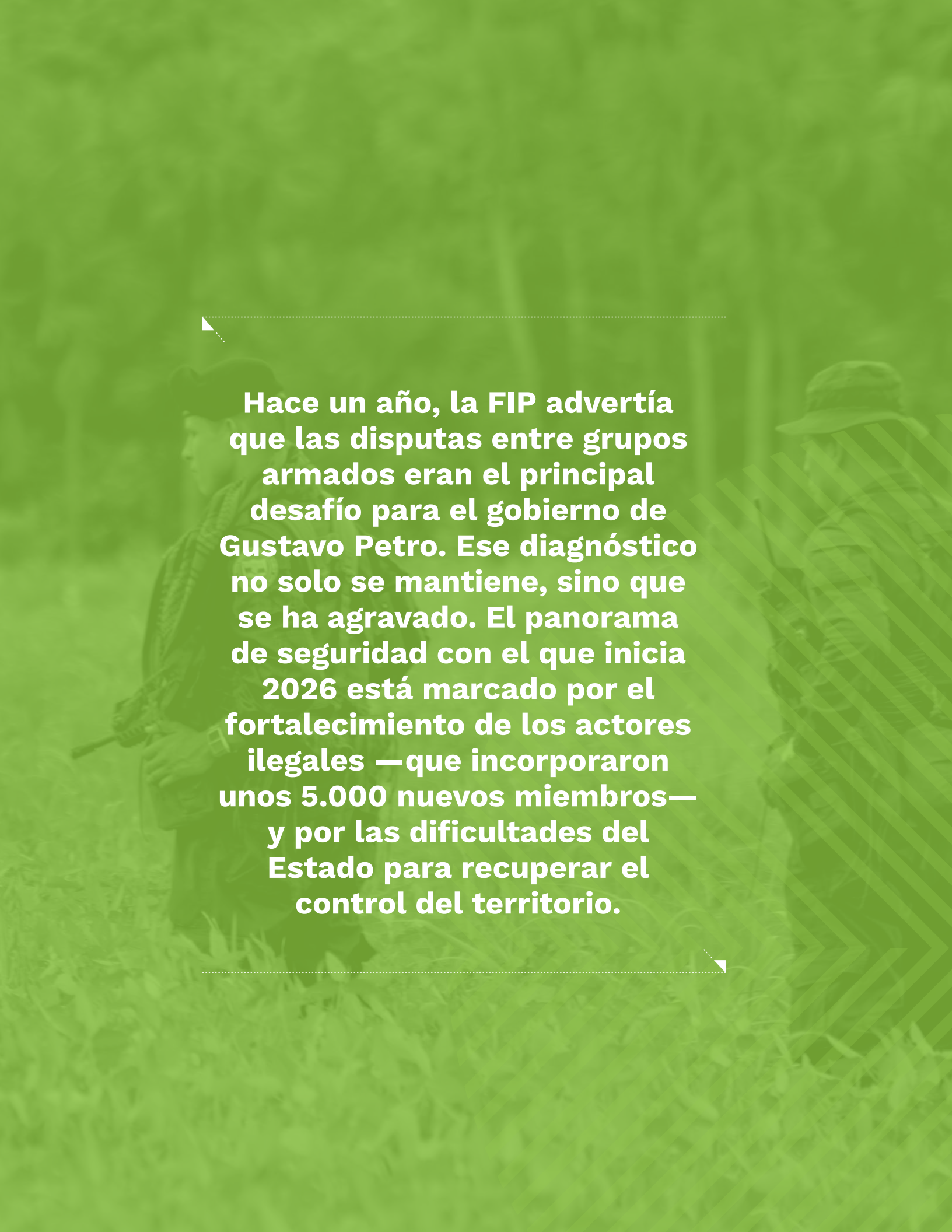
La capacidad del Estado sigue a prueba

10

El homicidio y otros delitos

11

Decisiones urgentes para contener la violencia



Hace un año, la FIP advertía que las disputas entre grupos armados eran el principal desafío para el gobierno de Gustavo Petro. Ese diagnóstico no solo se mantiene, sino que se ha agravado. El panorama de seguridad con el que inicia 2026 está marcado por el fortalecimiento de los actores ilegales —que incorporaron unos 5.000 nuevos miembros— y por las dificultades del Estado para recuperar el control del territorio.

La crisis en el Catatumbo definió el tono de la seguridad en 2025. Fue una coyuntura que puso a prueba la capacidad del Estado para atender una emergencia humanitaria de grandes proporciones y llevó al Gobierno Nacional a ejercer una presión más fuerte sobre los grupos armados. Esta ofensiva, sin embargo, no fue homogénea: no todos los actores ilegales la sintieron con la misma intensidad.

En el suroccidente del país, otro de los principales focos de disputa entre grupos armados a lo largo del año pasado, los resultados también fueron limitados. Allí, la Operación Perseo modificó parcialmente las dinámicas de confrontación en el cañón del Micay, en el Cauca, al evitar enfrentamientos directos entre los grupos. No obstante, esto vino acompañado de un aumento en los ataques de la estructura disidente Carlos Patiño, del Estado Mayor Central (EMC), contra la Fuerza Pública. Aunque el Estado mantuvo presencia en la zona, el control territorial siguió siendo precario y, más allá del casco urbano de El Plateado y algunas veredas cercanas, hoy continua en manos de los armados.

El escenario de seguridad se agravó con el magnicidio del precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, que no solo marcó el tono de la época preelectoral, sino que impactó la percepción general sobre el orden público en el país.

En medio de este panorama, el 2026 arranca con la política de Paz Total golpeada por escándalos y con un reconocimiento cada vez más extendido sobre sus límites y fracasos, incluso por parte del propio presidente. Las mesas de negociación siguen activas, pero avanzan acumulando compromisos que difícilmente se podrán cumplir. Aun así, el Gobierno sigue abriendo nuevos espacios de diálogo, como el de Tuluá, pese a que ya se evidenció que faltan capacidades para conducir estos procesos de paz urbana de manera responsable.

En ese contexto, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) con cuatro grupos distintos se perfila como uno de los mayores retos del tramo final de esta administración, tanto en términos de seguridad física como de las garantías jurídicas que implican. La FIP ha advertido que la Paz Total cada vez más se asemeja a una 'paz electorera', entendida como un medio para cumplir otros fines distintos a los de llevar alivios humanitarios a los territorios más afectados por el conflicto, una lógica en la que podrían inscribirse las ZUT y las nuevas mesas de diálogo.

Colombia deja atrás un año que cerró en rojo en varios de los indicadores de seguridad e impacto humanitario, y se enfrenta a un 2026 que comienza con señales claras de deterioro en estos frentes y con los grupos armados marcando el pulso en amplias zonas del país. Prueba de ello es que, en menos de un mes, el país ya volvió a registrar combates, comunidades desplazadas por el miedo al fuego cruzado y territorios en disputa.

1. Los grupos armados tienen 5.000 nuevos miembros

Las cifras a diciembre de 2025 muestran que los grupos armados continúan fortaleciéndose y ampliando su capacidad militar, una tendencia que se presenta desde 2018. En conjunto, el número de integrantes aumentó un 23,5% frente al año anterior y llegó a 27.121 personas (13.794 hombres en armas y 13.327 en redes de apoyo). El crecimiento ha sido constante, incluso en el corto plazo: entre julio y diciembre de 2025, el pie de fuerza aumentó un 7%. En este contexto, todo indica que el próximo gobierno deberá diseñar una estrategia de seguridad capaz de frenar este crecimiento y de enfrentar a grupos que podrían reunir cerca de 30.000 integrantes.

El aumento se presenta tanto en hombres en armas (+20%), como en redes de apoyo (+27%). Estos dos tipos de integrantes cumplen funciones diferentes, pero en ambos casos sus acciones generan impactos sobre la seguridad. Por ejemplo, aunque los hombres armados participan directamente en las actividades militares, las redes de apoyo son el pilar fundamental de la vigilancia y garantizan el cumplimiento de las normas del actor armado sobre el territorio.

En total, más de 5.000 nuevos integrantes¹ se sumaron a estas estructuras en solo un año. El crecimiento más notorio lo registra el Clan del Golfo, con un aumento del 30%, lo que equivale a casi 2.300 personas más en sus filas. Ni las acciones militares, ni las negociaciones, ni la oferta de sometimiento individual han logrado reducir la capacidad de reclutamiento y recomposición de todos los grupos.

Variación en la cantidad de integrantes según GAO (2024-2025)

	2024			2025			
Grupo Armado Organizado (GAO)	Hombres en armas	Redes de apoyo	Total	Hombres en armas	Redes de apoyo	Total	Diferencia en total
Clan del Golfo	2.675	4.876	7.551	3.328	6.512	9.840	▲ 30%
ELN	3.357	2.888	6.245	3.647	3.163	6.810	▲ 9%
EMC – Disidencias al mando de Iván Mordisco	2.283	996	3.279	2.692	1.327	4.019	▲ 23%
EMBF – Disidencias al mando de Calarcá	1.404	1.011	2.415	1.728	1.230	2.958	▲ 22%
CNEB	1.294	381	1.675	1.591	498	2.089	▲ 25%
Segunda Marquetalia	243	223	466	291	243	534	▲ 15%
ACSN	N/A	N/A	466	352	268	620	No aplica
Comuneros del Sur	153	N/A	237	165	86	251	▲ 6%

Fuente: Conteo de la Fuerza Pública. con corte a diciembre de 2024 y diciembre de 2025. En esta tabla no se tiene en cuenta a las disidencias del Frente 57, que para 2024 tenía 90 integrantes.

Hay al menos tres razones que explican por qué los grupos armados siguen creciendo: las campañas de expansión territorial y el fortalecimiento de su gobernanza local; la presión derivada de nuevas disputas, producto de fracturas internas. y de una mayor ofensiva de la Fuerza Pública; y, finalmente, la

adopción de nuevas formas de reclutamiento, como el ofrecimiento de salarios y otros incentivos, entre ellos bonos y vacaciones.

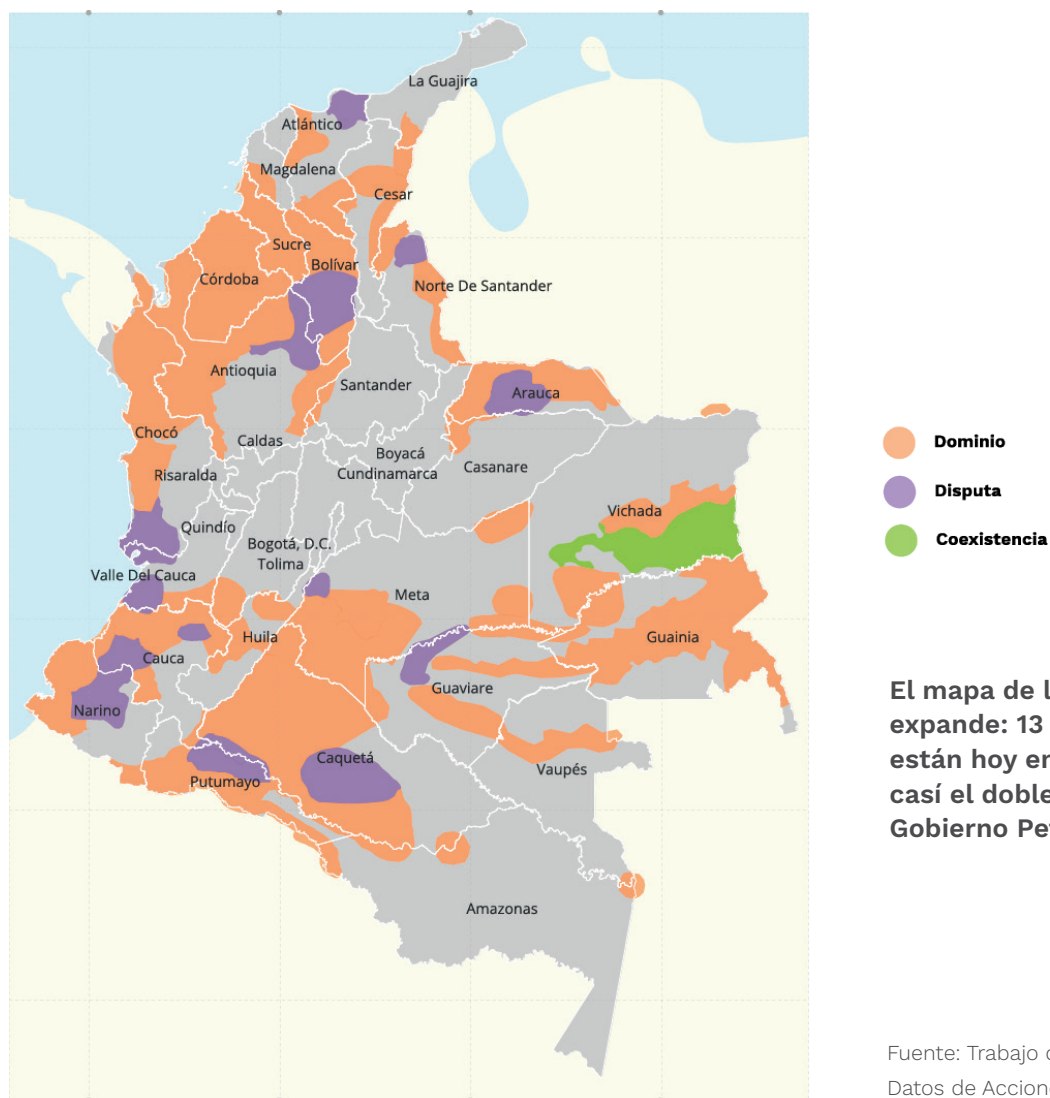
¹ De esos 5.000 nuevos integrantes, 620 corresponden a la inclusión de las ACSN como GAO.

2. Escala la guerra entre grupos, también se expanden y consolidan su control

En 2025, las disputas entre los grupos armados alcanzaron su nivel más alto en los últimos 10 años. Según el [DATEO](#) de la FIP, que hace seguimiento mensual a los principales indicadores de seguridad, los enfrentamientos aumentaron un 34% frente a 2024 (pasaron de 86 a 115). Este repunte está rela-

cionado con la ruptura de acuerdos que antes permitían la coexistencia entre estos grupos, como en el Catatumbo, donde desde hace un año se enfrentan el ELN y el Frente 33, y en Vichada, donde el ELN le disputa el control a la Segunda Marquetalia, además de nuevas pugnas surgidas tras la división de las disidencias. Regiones como Caquetá y Guaviare, que durante años estuvieron bajo el control de estas estructuras, hoy registran graves afectaciones humanitarias.

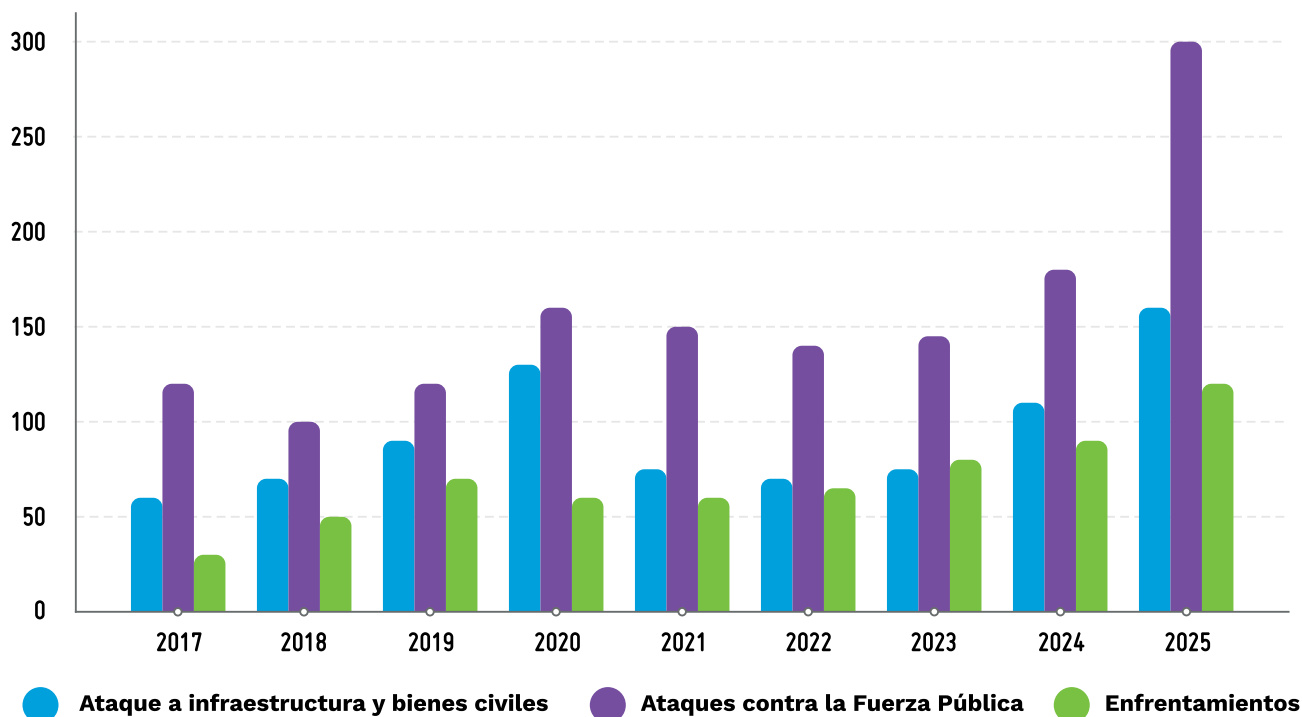
Núcleos de relacionamiento entre grupos armados 2025



En total, hoy hay 13 zonas de disputas activas en todo el país, casi el doble de las que existían al inicio del Gobierno Petro, en 2022. Este escenario ha tenido un impacto directo en la crisis humanitaria: en 2025 las cifras de desplazamiento forzado y confinamiento alcanzaron niveles que no se veían desde el inicio

de la implementación del Acuerdo de Paz². También se registró un fuerte aumento de ataques contra la infraestructura y bienes civiles (58% frente a 2024) y contra la Fuerza Pública (62%). En conjunto, 2025 muestra las cifras más altas desde 2016.

Acciones de grupos armados (2017-2025)



Fuente: Seguimiento a acciones del conflicto FIP.

En paralelo, los grupos armados continúan su expansión territorial. Aunque no se trata del momento de mayor crecimiento, el avance sigue siendo constante. El Clan del Golfo se fortalece en el norte del país, mientras que las disidencias amplían su presencia en zonas de Tolima y Huila. Frente a estos movimientos se han emitido alertas tempranas que no han tenido una respuesta efectiva por parte de las autoridades. El caso del Tolima es ilustrativo: en 2025 aparecieron nuevas estructuras tanto del

Estado Mayor de Bloques y Frente (las disidencias de 'Calarcá') como del Clan del Golfo.

La capacidad militar de estos grupos se ha potenciado con el uso de nuevas tecnologías. El empleo de drones les ha permitido atacar a la Fuerza

² <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/informe-de-situacion-humanitaria-2025-datos-acumulados-entre-enero-y-octubre-de-2025-fecha-de-publicacion-26-de-noviembre-de-2025>

Pública de manera más barata y efectiva, además de servirles para labores de vigilancia. Según datos de la Fuerza Pública, en 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados de explosivos, más del doble que en 2024 (119). La gran mayoría de estos eventos (237) se atribuyen al EMC.

Además, a propósito del paro armado del ELN en diciembre, quedó en evidencia el uso de otras herramientas de vigilancia para seguir los movimientos de la Fuerza Pública que antes no empleaban, como las cámaras camufladas.

Este avance territorial no solo implica más presencia armada, sino un control cada vez más fuerte sobre las comunidades. Los grupos buscan incidir en el poder local y en los procesos organizativos de la sociedad civil, ampliando su influencia sobre la vida cotidiana en las zonas donde operan.

Esto se traduce en mayores restricciones a la movilidad, controles directos como la carnetización y presiones constantes sobre los liderazgos locales. Según las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2025 más de un millón personas resultaron afectadas por confinamientos y limitaciones a la movilidad, triplicando lo registrado en 2024³. Al mismo tiempo, los grupos armados han intensificado los esfuerzos por mejorar su imagen pública, buscando proyectarse como actores con estatus político y promover un estilo de vida atractivo para nuevos integrantes. Esta estrategia ha incrementado la presión sobre organizaciones y liderazgos, a quienes les exigen mostrar respaldo a sus proyectos armados.

En ese contexto, las víctimas de desplazamiento forzado crecieron de manera alarmante, con un incremento del 85% (en buena medida, producto de la crisis del Catatumbo, que obligó a 92.000 personas a abandonar sus hogares). También se registró un aumento del 39% en los ataques a misiones médicas, una señal del deterioro de las condiciones de atención humanitaria.

En contraste, los homicidios contra líderes sociales disminuyeron un 15,5% (de 168 en 2024 a 142 en 2025), según el monitoreo de la FIP, una reducción que, aunque relevante, no compensa el agravamiento general de los riesgos y restricciones que enfrentan las comunidades.

Buena parte del fortalecimiento de los grupos armados no se refleja en las cifras. La pérdida de espacios de gobernanza del Estado y de las comunidades es difícil de medir, pero se siente en la vida cotidiana de los territorios. A esto se suma el subregistro de delitos como la extorsión y el reclutamiento forzado, cuya verdadera magnitud sigue siendo poco conocida, lo que dificulta la formulación de políticas públicas acordes con la realidad del conflicto.

3. La capacidad del Estado sigue a prueba

En 2025, según el monitoreo de la FIP las acciones de la Fuerza Pública aumentaron un 34%, un alza que, si bien indica mayor iniciativa operativa, no se tradujo en una mejora clara de las condiciones de seguridad, en especial en los territorios donde se desplegaron grandes operaciones para recuperar el control.

En términos generales, la capacidad para hacer frente a las acciones de los grupos armados sigue siendo un obstáculo grande. La ofensiva del Estado se intensificó con la llegada del general (r) Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa, pero estas acciones, que ya cumplen un año, no han logrado debilitar de forma significativa la capacidad militar y organizacional de los grupos.

La respuesta del Estado continúa siendo, en buena

3 <https://www.unocha.org/publications/report/colombia/informe-de-situacion-humanitaria-2025-datos-acumulados-entre-enero-y-octubre-de-2025-fecha-de-publicacion-26-de-noviembre-de-2025>

medida, reactiva. Se actúa después de que los hechos ocurren y no desde la prevención y la protección, lo que deja en evidencia un debilitamiento de las capacidades de inteligencia y anticipación por los frecuentes cambios de oficiales con mando y la reducción en cooperación internacional, entre otros factores. Mientras los grupos armados se adaptan con rapidez a las nuevas estrategias oficiales, la Fuerza Pública muestra pocas capacidades para ajustarse a los cambios en las dinámicas del conflicto.

Esto se ve con claridad en la reactivación de los bombardeos, a pesar de que ya no generan el mismo impacto estratégico que lograron en el pasado. El conflicto actual está fragmentado en múltiples estructuras móviles y dispersas y con formas de operar distintas, lo que dificulta identificar objetivos militares claros y eleva el riesgo de afectar a los civiles, incluidos menores de edad. Un escenario que, lejos de fortalecer la acción estatal, termina erosionando su legitimidad⁴.

El giro del Gobierno Petro con ofensivas más contundentes y frecuentes deja una lección clara: así como la paz requiere método, objetivos y recursos, la ofensiva militar también los necesita. Aunque hay resultados operativos visibles, los grupos armados no muestran afectaciones sustanciales en su capacidad de acción, el avance en la recuperación del control territorial sigue siendo limitado y la población continúa enfrentando presiones y afectaciones constantes.

Hace falta invertir más esfuerzos en comprender cómo funcionan hoy los grupos armados y cómo se articulan con el crimen organizado, las economías legales e ilegales y las comunidades en los territorios que controlan. Este Gobierno se ha destacado por el aumento de incautaciones de droga (861.166 kg en 2025), pero los resultados muestran que estas acciones no han tenido un impacto real sobre la capacidad de los grupos. En buena medida, porque aún no está claro cuáles son los puntos críticos de las economías ilegales que deben ser atacados para desestabilizarlos. Y si el entendimiento sobre sus vínculos con las redes

internacionales del narcotráfico sigue siendo limitado, el panorama es aún más difuso frente a otros negocios criminales como la extracción ilícita de oro, el tráfico de fauna y flora o la extorsión, fenómenos clave para su sostenimiento y expansión.

4. El homicidio y otros delitos

Los homicidios no variaron significativamente en 2025. El año cerró con 13.722 hechos, un aumento cercano al 3% frente al año anterior. El análisis del comportamiento de este delito requiere una precisión clave: aunque en algunas regiones la violencia homicida sigue siendo central en las disputas entre grupos armados, no ocurre así en todo el país. Hoy, muchas estructuras criminales recurren menos al homicidio, no por una reducción de su poder, sino porque la alta visibilidad de la violencia afecta sus economías ilegales y sus operaciones en el territorio.

En la seguridad ciudadana los resultados son mixtos. En 2025, algunos delitos mostraron una mejora significativa. El hurto a comercios cayó un 30%, el hurto a automotores disminuyó un 17%, y a residencias el 11.3%. Aunque las cifras reflejan reducciones en amenazas (-18%) y extorsión (-1%), estas son dos modalidades que, como se mencionó anteriormente, no capturan la realidad de muchas ciudades con crisis de seguridad asociadas a ambos delitos, como es el caso de Barranquilla o Buenaventura.

En cuanto al secuestro, en 2025 se registró un aumento del 133% frente a 2024 (pasando de 279 a 651 casos). Este delito regresó con fuerza y aunque nunca desapareció del todo, sí cambió su forma. Ya no es el secuestro rural y prolongado que marcó los años 90, sino una práctica más urbana, con más actores involucrados y en la que predomina la modalidad extorsiva.

• • • • •

⁴ <https://ideaspaz.org/publicaciones/noticias/2025-11/la-otra-cara-de-los-bombardeos-siguen-siendo-efectivos-en-el-conflicto-actual>

5. Decisiones urgentes para contener la violencia

Para enfrentar a estructuras ilegales cada vez más fragmentadas y con dinámicas híbridas, el primer paso es ordenar y armonizar la respuesta del Estado. No basta con mirar la acción de la Fuerza Pública: es clave revisar cómo se articulan todas las entidades responsables del orden público, la seguridad y la justicia. Las críticas a las operaciones militares tienen fundamentos, pero también es necesario poner el foco en el papel de la Fiscalía y de otras instituciones encargadas de la investigación criminal, que son determinantes para golpear las redes que sostienen a estos grupos.

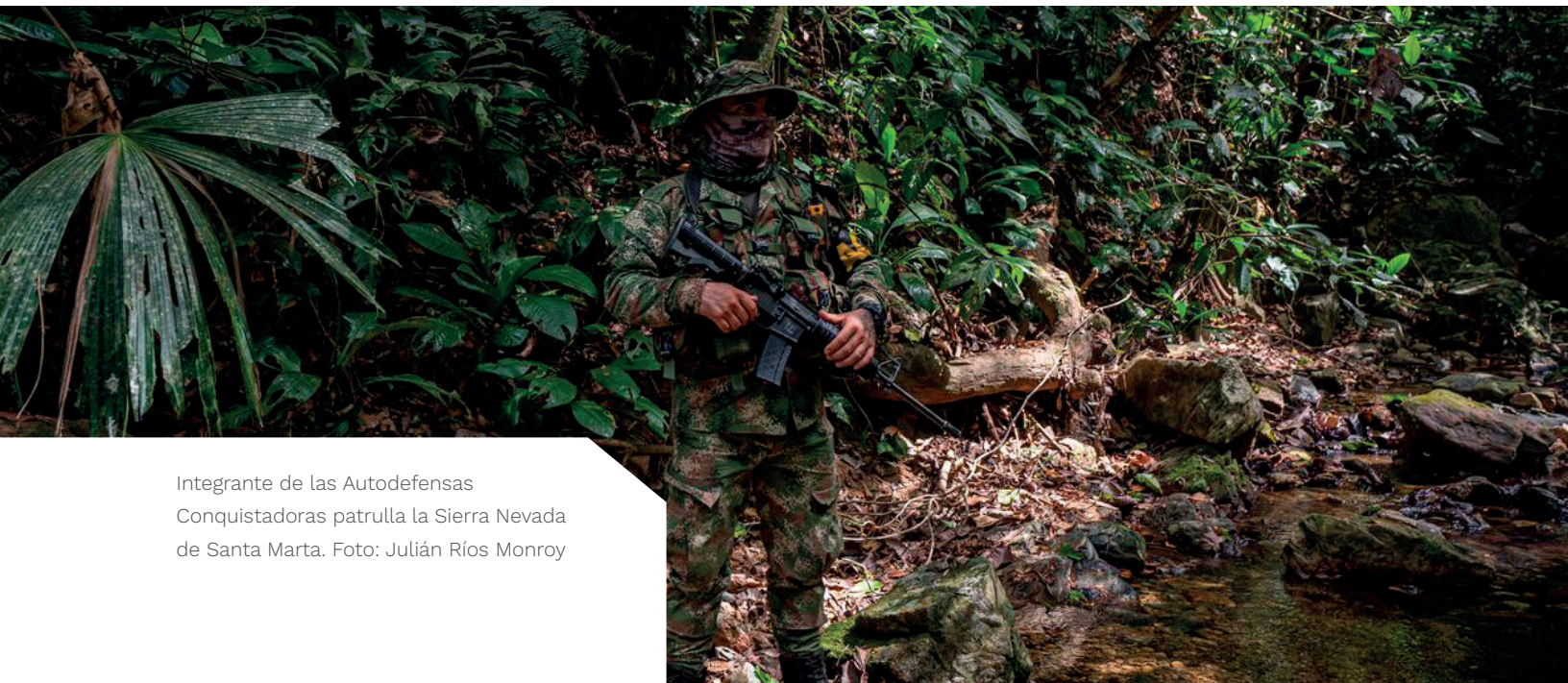
La FIP ha insistido en que es necesario avanzar en un análisis real de las capacidades institucionales asociadas al sector defensa para poder establecer recomendaciones concretas, realistas y ejecutables en materia de seguridad, que estén acorde con los desafíos actuales que el país enfrenta.

Ese ajuste pasa por un diagnóstico honesto de las capacidades institucionales del sector defensa y

seguridad. Solo a partir de ese análisis es posible formular recomendaciones que no se queden en el papel, sino que sean concretas, realistas y ejecutables, y que respondan a los desafíos actuales.

Aunque restan pocos meses de gobierno, eso no puede servir de excusa para la inercia. Las condiciones de seguridad en las regiones cambian con rapidez y exigen balances claros sobre cómo se ha respondido a escenarios críticos, tanto en zonas rurales —como Catatumbo, Cauca o Guaviare—, como en contextos urbanos, donde operan organizaciones de crimen organizado que están detrás del aumento de homicidios y extorsiones; es el caso de Buenaventura, Barranquilla o Cúcuta. Siguen siendo necesarios ajustes en las estrategias de reacción para evitar que estas crisis se profundicen.

Finalmente, mantener abiertas las negociaciones de la Paz Total no puede traducirse en mayor permisividad frente a las acciones de los grupos armados. El diálogo no debe implicar tolerancia frente a la violencia, ni mucho menos dejar sin respuesta los ataques contra la población y el control ilegal del territorio.



Integrante de las Autodefensas
Conquistadoras patrulla la Sierra Nevada
de Santa Marta. Foto: Julián Ríos Monroy

27.000 **combatientes** **y récord en** **disputas:**

el deterioro de la
seguridad marca el
inicio de 2026

ideaspaz.org